

arteka



1936, ESCENARIO DE LUCHA ENTRE CLASES (II)



Este número de Arteka es una continuación del anterior. Es el broche final a la dolorosa efeméride de 1936.

La primera parte se centró en el golpe y la resistencia del movimiento obrero, que lo convirtió en guerra civil con su heroica resistencia. Estos tres artículos finales nos dan ejemplos de la función y el fundamento del régimen que instauraron los golpistas. El franquismo fue la dictadura de clase requerida por el sistema internacional, fue una purga de exterminio político y fue un reordenamiento de la sociedad. Solo son unos pocos ejemplos del profundo cambio que se instauró, pero suficientes para apreciar que, como ya adelantamos en la primera parte, esta efeméride está atravesada por la lucha de clases.

Contenido

06



20



06

Dos ciudades

Jon Larrabide

20

Limpieza política en Nafarroa

Alaitz Iturzaeta

32

Urbanismo y lucha de clases en el primer franquismo

Jon Aldabaldetrek



32



56

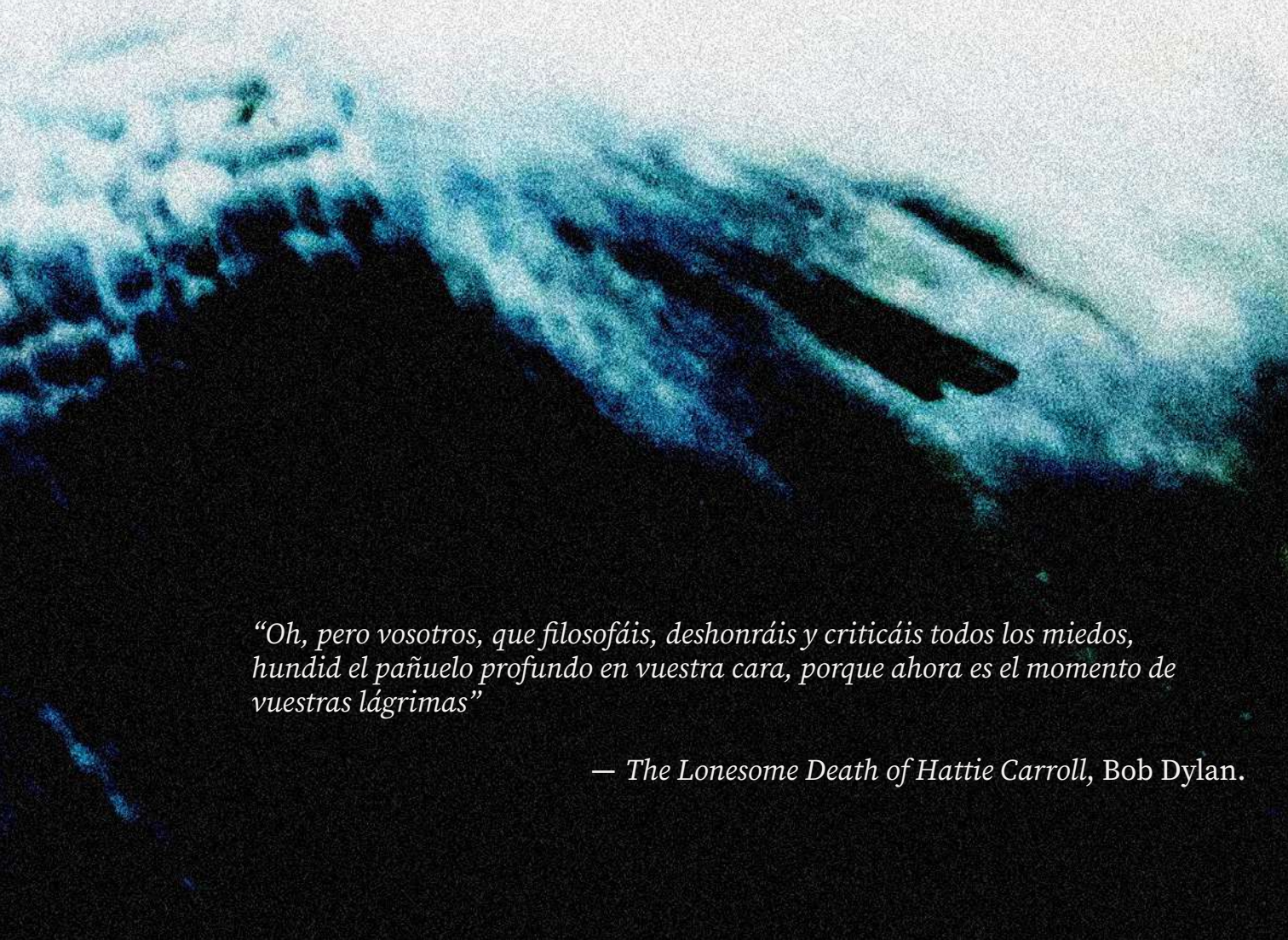


DOS



CIUDADES

Texto — **Jon Larrabide**



*“Oh, pero vosotros, que filosofáis, deshonráis y criticáis todos los miedos,
hundid el pañuelo profundo en vuestra cara, porque ahora es el momento de
vuestras lágrimas”*

— *The Lonesome Death of Hattie Carroll*, Bob Dylan.

El texto que tienes entre manos trata sobre la Guerra Civil. De sus características propias, de sus adjetivos, actores, nombres y apellidos, que entrelazados conforman su relato. Un relato propio, que debe ser leído a la luz de una época, de un contexto, ya que no hay ninguna otra manera de entenderlo. Lo que sigue a esta introducción es ese relato, más concretamente, el de sus partes, aunque quizás no tanto de los protagonistas, sino de los participantes, así como lo que se esconde tras de sí.

LOS MOVIMIENTOS DE PREGUERRA

Los principales agentes de la época comenzaron sus movimientos años antes del inicio de la Guerra Civil propiamente dicha. Si entendemos la Guerra Civil como conflicto que condensa una época, es lógico que identifiquemos antes una fase de conformación política, un proceso de equiparación política, con los estándares de la época. Este es un proceso que, por supuesto, se da de manera más o menos natural en cierta medida, pero existe una intencionalidad y una acción política que la respaldan en algunos casos. Las organizaciones políticas que materializan las corrientes políticas de la época mueven sus fichas a lo largo de los años que preceden a la Guerra Civil.

La Italia fascista empezó sus operaciones en territorio español desde el advenimiento de la Segunda República (a la que comparó con el Gobierno provisional de Kerenski). Se trató de una agenda orientada a bloquear el desarrollo de un proyecto político susceptible de alinearse con Francia y contrario a la expansión del proyecto fascista, en términos organizativos concretos, pero también ideológicos. Una campaña de bloqueo y promoción política que se desplegó a distintos niveles: financiación a organizaciones (Falange Española, Renovación Española, carlistas, Unión Militar Española) y subversiones (la Sanjurjada y el mismo golpe de Estado); un aparato de inteligencia con inclinación conspirativa activa (que se tradujo en pactos concretos como el Pacto de Roma y los Contratos Romanos), y un aparato de infiltración diplomática y cultural (el Instituto Italiano de Cultura, la *Società Dante Alighieri* y las *Casa d'Italia*, entre otros). Una implicación diseñada *ad hoc* para proyectar una desestabilización del proyecto de la República en términos directa o explícitamente fascistas, que además propició (de la mano de tendencias histórico-políticas de

la época) no solo la alianza italoespañola y el desarrollo de la tendencia fascista en España, sino la fascistización de toda la derecha española. La infiltración nazi fue más tímida durante estos años, aunque también se registran actividades de índole cultural o diplomática y propagandísticas, así como de espionaje de la NSDAP/AO y la Gestapo a través de la creación de empresas tapadera como la Hans Hellerman y el Servicio de Control Portuario. Toda esta labor encajará con la tendencia política polarizante de la época, y dejará a su paso un poso de fascistización en la amplia derecha española.

Al otro lado de la balanza de la época, la Komintern también desarrolló una agenda política propia en el territorio, mas lo hizo de manera distinta y cambiante. Distinta en formas y en contenido, y cambiante al son del giro en materia de política exterior experimentado por la Komintern en la década de los 30 (de la política de clase contra clase, al frentepopulismo). Al nivel de la diplomacia blanda o trabajo cultural, nos encontramos con la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y los viajes organizados por dicha aso-

La Italia fascista empezó sus operaciones en territorio español desde el advenimiento de la Segunda República (a la que comparó con el Gobierno provisional de Kerenski). Se trató de una agenda orientada a bloquear el desarrollo de un proyecto político susceptible de alinearse con Francia y contrario a la expansión del proyecto fascista, en términos organizativos concretos, pero también ideológicos

La Internacional Comunista había enfriado sus pretensiones insurreccionales a raíz del aplastamiento del contexto revolucionario de posguerra, el aislamiento y la tenaza que sufría la URSS, y el auge del fascismo en Europa, y apostaba por la creación de frentes amplios que pusieran freno al avance de la reacción, concepto que encajaba "a priori" a la perfección con el contexto español

ciación y la embajada soviética. Las diferencias empiezan en la forma operativa, la manera de organizar la influencia soviética en el territorio, y es que a diferencia de los casos desarrollados en el párrafo anterior, la Komintern contaba con un modelo organizativo territorializado sobre el terreno: el Partido Comunista (que nació del impacto de la Revolución soviética y la misma Komintern). Un factor que proyecta su acción como agente territorial de una tendencia o proyecto internacional. Una Internacional que había enfriado sus pretensiones insurreccionales a raíz del aplastamiento del contexto revolucionario de posguerra, el aislamiento y la tenaza que sufría la URSS, y el auge del fascismo en Europa, y apostaba por la creación de frentes amplios que pusieran freno al avance de la reacción, concepto que encajaba *a priori* a la perfección con el contexto español. Esta iniciativa se complementó y realizó con la inversión de cuadros militantes (los “delegados”) encargados de supervisar y asesorar la actividad política, así como con los diferentes brazos del Partido (la estructura del PCE, el periódico y el Socorro Rojo Internacional).

Aunque la intervención de preguerra no se limite a estos actores, dejaremos a las potencias occidentales para el capítulo que viene, no por poco significativas, sino simplemente porque encajan mejor con el contexto de preguerra. Mención honorífica para el Vaticano, pilar espiritual de la labor antirrepublicana, que aunque mantuvo una actitud tensa y cambiante como institución (interesada en el entendimiento con la República, pero amenazada en sus intereses espirituales y paradójicamente terrenales), tuvo un papel protagonista tanto directamente (a través de la labor política de la institución –*Dilectissima Nobis*– y de sus agentes), como indirectamente

(revistiendo las formas políticas que conformarían el bando sublevado).

CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA SOCIEDAD DE NACIONES, LA INTERVINIENTE NO INTERVENCIÓN

La acción de los distintos agentes implicados debe ser enmarcada en primer lugar en una especie de contextualización general, a partir de la cual las acciones concretas adquieren sentido, presas por lo demás de la superficialidad absurda.

La Guerra Civil española se enmarca en lo que se conoce como el periodo de entreguerras, que como su propio nombre indica comprende la etapa que transcurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Representa, asimismo, la continuación de las tendencias históricas que explotaron en la IGM, así como la antesala (en distintos sentidos) de la segunda. Esto la convierte en un cruce de muchos caminos, en el cruce de muchos agentes con sus respectivos intereses, que han de ser, en primer lugar, por lo menos presentados.

Al finalizar la IGM, el panorama político europeo quedó fragmentado en distintos sentidos. Se diseñó y ejecutó un plan general de paz, basado en los intereses de las potencias vencedoras, inscritos en los tratados. La supervisión de este plan queda en manos de la Sociedad de Naciones (aunque fuese a nivel virtual), la fachada institucional burocrática de las potencias vencedoras (aunque los EE. UU. no llegaron a participar por la negativa republicana a seguir mezclado en el barro europeo). No obstante, este ejercicio de escenificación de la paz y de la identidad de intereses no fue más que la forma que adoptó la democracia occidental en el periodo de entreguerras, la forma en la que sus manifestaciones particu-

lares velaron por e hicieron valer sus intereses. Una herramienta política en manos del Imperio británico y el francés.

El Gobierno británico (*National Government*) representaba en la época la punta de lanza del anticomunismo conservador. Un Gobierno conformado por una escisión del Partido Laborista (*National Labour*), el ala derecha del Partido Liberal (*National Liberals*) y el Partido Conservador (*Tories*), controlado de facto por la mayoría y el empuje de los conservadores, para responder a la crítica coyuntura de la década de los 30. Un Gobierno conformado, por lo tanto, para hacer valer los intereses de la aristocracia y la oligarquía británicas, para restablecer el orden tanto en el Imperio como a nivel internacional. Cabe resaltar que tras liquidar la crisis imperialista (por supuesto, eventualmente) con la victoria de la IGM, las élites británicas tenían dos designios claros: conservar y restablecer su posición de fuerza en lo económico, frente o por encima del resto de potencias, y conservar y restablecer el orden en lo político, frente a las amenazas internas (movimientos en las colonias) y, sobre las demás cosas, la amenaza del comunismo internacional.

Y en esto llegó la Segunda República, forma política que encarnaba (también en sus contradicciones) el ser de la época. Y el Imperio actuó como se esperaba de él: puso en marcha una práctica política territorializada a través de la embajada y los consulados, y una red de espionaje dirigida al boicot (estrategia que culminó en la política de no intervención) y al derribo de la República fundada en la hostilidad a lo que era y lo que podía llegar a ser. En consonancia con una política económica restrictiva (bloqueo financiero y evasión de capitales) y la agencia del personaje Juan March (banquero mallorquín que se encuentra en el centro de la trama económica del golpe de Estado, instalado en Londres tras huir de España).

La situación de partida de Francia era algo distinta. La depresión tardó algo más en atraparla (por sus reservas de oro y una menor dependencia a las exportaciones), aunque llegó de todas formas, y aunque su primera respuesta se formuló a partir de un Gobierno de coalición entre socialistas y radicales, su fracaso resumió la decadencia que iba a desarrollarse a lo largo de los próximos años. El bloqueo gubernamental derivó en la génesis y el desarrollo de un espacio entre el Gobierno y las masas, un vacío político o crisis de representatividad (unido a la si-

tuación crítica que vivían los comunistas y los anarquistas en esa época), al que responde un auge de la reacción y la extrema derecha (las llamadas ligas, tales como *L'Action Française*, *Les Croix-de-Feu*, *Le Francisme* o *Solidarité Française*), que culmina en un intento de insurrección armada el 6 de febrero del 34. De su fracaso, y como reacción, se articuló en Francia el Gobierno del *Front Populaire*, una coalición formada a partir del Partido Socialista, los radicales y el Partido Comunista. Pese a la primera impresión que este elenco pueda sugerir, la realidad es que se trató de un Gobierno débil, chantajeado por el Gobierno británico y temeroso de la amenaza nazi y fascista, y por supuesto la amenaza revolucionaria. El desenlace se escribe solo. Aunque tuvo cierta incidencia en los años de preguerra (existía una especie de sintonía política entre ambos Gobiernos, aunque el país hizo también las veces de base de operaciones para los golpistas), su participación cualitativa comienza con el inicio de la Guerra Civil, igual que ocurre con su hermano de armas, el Reino Unido.

No porque la orientación de su política cambie significativamente, sino porque en política el tiempo, el momento, lo cambia todo radicalmente. La propuesta de las democracias occidentales para la Guerra Civil española fue el Acuerdo de No Intervención, enmarcado dentro de la estrategia de apaciguamiento general que estas potencias habían diseñado para el expansionismo alemán e italiano. Estas potencias prefirieron una guerra confinada y periférica a una nueva guerra que los incluyese. Un cálculo político que, además de desacertado en lo que a su lógica general se refiere, resultó catastrófico para la República española. 27 países firmaron el acuerdo de manera inmediata. Países entre los que resaltan las potencias promotoras (Reino Unido y Francia), Alemania e Italia, y la URSS (volveremos sobre esto algo más tarde). Huelga decir que además de ser una farsa evidente, ya que se documentó de sobra la participación (decisiva) que Alemania e Italia estaban teniendo en la contienda (desde antes de empezar la guerra), el acuerdo tuvo un efecto punitivo sobre todo para el Gobierno de la República. Hablamos de tal cruenta desfachatez, que puso a los alemanes e italianos a cargo del control naval del tramo de costa bajo control republicano (*sic!*), a la vez que impedía al Gobierno republicano comprar armas en el mercado ordinario. Hasta ahí la principal propuesta de las tan respetables democracias británica y



El Imperio británico actuó como se esperaba de él: puso en marcha una práctica política territorializada a través de la embajada y los consulados, y una red de espionaje dirigida al boicot (estrategia que culminó en la política de no intervención) y al derribo de la República fundada en la hostilidad a lo que era y lo que podía llegar a ser. En consonancia con una política económica restrictiva (bloqueo financiero y evasión de capitales) y la agencia del personaje Juan March (banquero mallorquín que se encuentra en el centro de la trama económica del golpe de Estado, instalado en Londres tras huir de España)

francesa, por si a alguno le sorprende a estas alturas de la película. Pero es que la brillante y democrática actuación de los ingleses no se queda ahí. La intervención activa de Londres se traza desde el mismo golpe militar (planeado en Londres y realizado con la participación de agentes ingleses), hasta la victoria del bando nacional (de hecho, el Gobierno de Chamberlain reconoció la legitimidad y oficialidad del régimen franquista para el 27 de febrero del 39), y se desgrana en la denegación de recursos, el estrangulamiento financiero, el bloqueo naval a la flota republicana, el bloqueo de los puertos de Bilbo y Santander y en prestar servicios de inteligencia militar al bando nacional, entre otras acciones.

LA RESPUESTA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

A pesar de que la URSS apostó en un primer momento por la no intervención, la Komintern movilizó sus recursos de manera casi inmediata. Su labor se desplegó en dos principales ejes: el propagandístico y el logístico.

Los aparatos comunicativos y de inteligencia de la Komintern se dispusieron de manera inmediata a las labores de recabar información, para proyectarla al mundo a través de distintos canales (teniendo en cuenta que contaba con una estructura de partidos y aparatos de comunicación propios). El objetivo de esta labor era la denuncia general (particularmente, el juego sucio de las potencias referenciadas), a la vez que proporcionar un marco explicativo general que desentrañara las tendencias de la época presentes en el conflicto. Aunque la labor de agitación y protesta llevada a cabo por cauces institucionales (en Reino Unido y Francia, por ejemplo) no sirvió para modificar las posturas de los respectivos Gobiernos, esta actividad tuvo un eco de gran escala tanto en el proletariado, como en una parte de la intelectualidad europea, eco que derivó posteriormente en diversas iniciativas de apoyo y, por supuesto, en la formación de las Brigadas Internacionales (que analizaremos con mayor detalle más adelante). Esta campaña se desarrolló principalmente a través de los distintos comités (como el Comité de Ayuda a las Víctimas del Fascismo Español o la Asociación de Intelectuales en Defensa de la Cultura), además del vasto despliegue de recursos comunicativos (carteles, exposiciones o producciones cinematográficas). Los militantes comunistas a lo largo y ancho de Europa se encargaron de plasmar

esta realidad en las calles, desencadenando una movilización obrera de dimensiones hercúleas (huelgas, movilizaciones, etc.).

En el ámbito logístico, podríamos llegar a hablar incluso de la construcción de una especie de Estado paralelo. La República, una vez estalló la Guerra Civil, era tanto un Estado partido o en desintegración, como un Estado en guerra. Una parte de los distintos vacíos de esta nueva República se llenó a partir de la movilización de la sociedad en defensa de la misma. No obstante, esta movilización se encuadró en organizaciones concretas, entre las que se encontraban (no solo) las organizaciones de corte comunista. Además de eso el Socorro Rojo Internacional (antes mencionado) tuvo una gran importancia tanto en la retaguardia como en el frente, a la hora de aportar medios, infraestructura, personal y organización asistencial y médica (hospitales, redes de personal médico, casas infantiles, comedores populares y recogida de dinero y material).

Todo esto, complementado con la asignación de cuadros militantes que hicieron una gran aportación tanto a nivel político como militar, tanto en las estructuras oficiales como en las paralelas. Todo ello convirtió a la Komintern en un socio de vital importancia para la República, si no para ganar la guerra, por lo menos para poder llevarla a cabo.

LA EFECTIVA INTERVENCIÓN DE LOS ESTADOS

Tras haber repasado la injerencia de algunos Estados en los años previos a la Guerra Civil, pasaremos ahora a ordenar la información relativa al periodo de la contienda. La Italia fascista ya estaba plenamente involucrada en el asunto español para el inicio de la guerra, pero, evidentemente, ese salto transformó cualitativamente su participación, tanto en forma como en intensidad. Alemania, pese a haber mantenido un perfil más bajo hasta ese momento, también entrará con saña al conflicto, así como la Portugal salazarista.

Aunque sea difícil hipotetizar acerca del desarrollo y desenlace del conflicto sin la participación de estos agentes, está claro que, a la luz de los acontecimientos, tuvieron un gran peso a la hora de inclinar la balanza, así como en la velocidad de dicha inclinación. Aunque una parte de ese mérito deba ser atribuido al papel del Reino Unido y Francia, no hay que dejar de la-

do la motivación propia y la seriedad con la que afrontaron su cometido a la hora de convertir la guerra en un escenario favorable al bando nacional y en un infierno para el bando contrario.

Las causas generales de esta participación han de buscarse, en primer lugar, en el contexto general o internacional. Hablamos de la época del auge y expansión del fascismo, en términos explícitos e implícitos, así como de la época de la revolución proletaria mundial. Hablamos de un periodo de guerra: guerra entre programas y proyectos, pero, sobre todo, guerra entre dos mundos. Aunque esta causa explique las líneas generales del asunto, cabe detenerse en las motivaciones específicas de estas potencias, ya que sirven para ensanchar el relato y explicar posteriores detalles.

El caso italiano se alinea casi a la perfección con estas líneas generales. El proyecto franquista encajaba con sus planes hegemónicos en el Mediterráneo, así como con el proyecto

de una Europa como una constelación de regímenes fascistas o fascistizados (frente al modelo decadente de las democracias liberales). Por el contrario, un eje republicano y progresista francoespañol representaba un potencial riesgo para el despliegue de dicho proyecto. El caso alemán podría categorizarse como algo menos espiritual y político, más terrenal, aunque también combinara elementos económicos (fuente de materiales estratégicos destinados a la industria militar), geopolíticos (enfangar al Reino Unido y a Francia en un conflicto distractivo y pinzar a Francia de cara a un futuro conflicto con ella) y militares (campo de entrenamiento o de pruebas para las renovadas capacidades militares alemanas). La implicación italiana también tuvo algo de esto último. Portugal simplemente compartía las bases políticas del franquismo y, por ende, aborrecía y en cierta medida temía al proyecto de la República y sus potenciales proyecciones.



La ayuda de los italianos al bando nacional se desplegó a distintos niveles. El más impresionante y sonado es el militar (que, a su vez, se despliega tanto en armamento como en soldados), bien por su magnitud y su eficacia, bien por los sangrientos y desgarradores episodios que ocasionaron. La aportación de los italianos comprende 150 tanquetas ligeras, unas 2000 piezas de artillería, miles de vehículos de transporte, 750 aviones, destructores, y submarinos (que guardaron las costas del mediterráneo) a nivel de material de guerra, complementado con entre 75.000 y 80.000 efectivos sobre el terreno (organizados en el "Corpo Truppe Volontarie")

La ayuda de estos se desplegó a distintos niveles. El más impresionante y sonado es el militar (que, a su vez, se despliega tanto en armamento como en soldados), bien por su magnitud y su eficacia, bien por los sangrientos y desgarradores episodios que ocasionaron. La aportación de los italianos comprende 150 tanquetas ligeras, unas 2000 piezas de artillería, miles de vehículos de transporte, 750 aviones, destructores, y submarinos (que guardaron las costas del mediterráneo) a nivel de material de guerra, complementado con entre 75.000 y 80.000 efectivos sobre el terreno (organizados en el *Corpo Truppe Volontarie*). La aportación de los alemanes destaca en el campo de la aviación, en tanto que aportaron 600 aviones de última generación, además de cerca de 180 tanques ligeros y baterías de cañones. También aportaron entre 16.000 y 19.000 soldados, entre los que destaca la Legión Cóndor. La aportación de los portugueses fue algo más tímida. Entre 8.000 y 12.000 combatientes (*viriatos*), así como armamento ligero variado. Un despliegue de recursos que casa tanto con la superioridad militar del bando nacional, como choca con la inferioridad de los republicanos. A esto hay que añadirle, además, la organización de todos estos recursos respaldada por mandos militares, profesionales de guerra y todo tipo de especialistas empeñados

en hacer de la muerte una ciencia y una profesión modernas (como se probó en la Guerra Civil y posteriormente se ensayaría en la IIGM en una escala mayor).

No obstante, el apoyo de estos Estados no se limitó a lo mencionado. A esto hay que sumarle una importante fuente de financiación y recursos. Se estima que ambos bandos gastaron una cantidad de dinero similar en la guerra, una suma entre 695 y 715 millones de dólares. Alemania e Italia invirtieron una cantidad similar a esa en financiar la contienda (mediante distintos mecanismos para la compensación de la deuda), a lo que hay que sumarle el crédito proveniente de las fuentes portuguesas y de empresas como Texaco y Shell, que también quisieron aportar su granito de arena (aparte de las aportaciones de distintos agentes en el extranjero, tales como Juan March o Alfonso XIII).

En tercer lugar, nos encontramos con el apoyo logístico. Todo un entramado de rutas y de infraestructura militar, de transporte y de inteligencia al servicio de los franquistas que lo hicieron más veloz, eficaz y, por lo tanto, letal.

El círculo lo cierra el simple dejar hacer. La posibilidad de acceder a suministros, armamento y soldados de manera continuada e ilimitada acrecentaron la diferencia existente entre los dos bandos.

Al otro lado nos encontramos con dos agentes, principalmente, aunque sin duda la URSS merece una gran parte del protagonismo. Por ponernos en contexto, la URSS se encontraba en pleno viraje en el ámbito de la política exterior. Una vez disuelta la oleada revolucionaria de posguerra, y de la mano de la táctica del *frentepopulismo*, la URSS tradujo su política exterior al contexto en el que se encontraba. Atenazada por los proyectos expansionistas que la acechaban izquierda y derecha (Alemania y Japón) y arrastrada por su aislamiento geopolítico y su debilidad relativa, decidió en un momento acordar la no intervención junto con el resto de las potencias. La hipótesis sobre la que descansaba esta decisión era la de un posible acercamiento a Francia y Reino Unido. No obstante, el carácter farsante y estéril de dicha iniciativa la llevaron a la intervención activa a partir de septiembre. Esta nueva posición se respaldaba en una nueva apuesta geopolítica (para acercarse a las potencias mencionadas proyectándose como un socio en el que confiar), una apuesta política (hacer frente al fascismo) y un elemento de presión (proveniente del proletariado internacional organizado). Se ponía en marcha la Operación X.

El desarrollo de la operación de apoyo es similar en sus niveles a la descrita en la primera parte de este capítulo. Armamento (648 aviones, 347 tanques, 60 blindados, 1.186 piezas de artillería, 340 morteros, 20.486 ametralladoras, 497.813 fusiles y muchos millones de cartuchos, proyectiles y bombas), aunque menor al aportado por los fascistas y de recepción más tardía e irregular, crédito (70 millones de dólares en el 38 y otros 50 que nunca terminaron de llegar) y efectivos (especialistas –unos 2000–, asesores militares, pilotos, carristas, técnicos y agentes de inteligencia).

Aunque el apoyo prestado languidezca frente al desarrollado anteriormente, hay una serie de factores que ayudan a situarlo de manera más concreta. A diferencia del bando nacional, el bando republicano sufría un bloqueo efectivo, articulado en lo jurídico y respaldado en lo geopolítico. La URSS respondió tarde y a medias, en gran medida debido a ese factor. Con todo, la URSS fue, además del mayor apoyo estatal de la República, un apoyo imprescindible, sin el que la República no hubiese podido aguantar el pulso durante los cuatro años que duró la contienda. Las labores militares, de inteligencia y de apoyo llevadas a cabo por los especialistas provenien-

tes del Este fueron determinantes a la hora de articular el ejército popular, planificar la guerra, y entrenar a soldados y especialistas (en la guerra en el frente, así como en la guerra de guerrillas).

Para ir acabando con este apartado, cabe resaltar que el único otro Gobierno que apostó de manera activa por proteger y apoyar el bando republicano fue México, que también merece su mención honorífica, ahora sin ningún tipo de retintín. Aunque su ayuda fuese menor en cantidad, también resultó de gran importancia, bien como pantalla para la compra de armas burlando el estrangulamiento del Acuerdo, bien como país de acogida para los exiliados de la República.

EL EJEMPLO HEROICO DE SOLIDARIDAD Y UNIVERSALIDAD: VOLUNTARIOS Y BRIGADISTAS

Llegamos al final de nuestra historia, al capítulo reservado a los miles de voluntarios que trascendieron sus fronteras nacionales y vitales para formar en la Guerra Civil, respondiendo con arrojo a su época. Alrededor de 40.000 voluntarios, procedentes de más de cincuenta países y de las más variadas trayectorias vitales y políticas y origen (aunque la mayoría fueron de origen obrero) arribaron a territorio español para empuñar las armas y hacer la guerra al fascismo.

Este cuerpo de voluntarios provenía en gran medida de la lucha contra el fascismo en sus respectivos países (los fascistas de Oswald Mosley en Inglaterra y sus análogos o similares en Francia) o del exilio impuesto por los distintos regímenes autoritarios de la época (como ocurría en el caso de algunos italianos, los alemanes, austriacos y polacos). También hubo una gran cantidad de judíos, empujados por la motivación de hacer frente al avance del fascismo en Europa. Comunistas, anarquistas, antifascistas de distinto cuño, internacionalistas. Todos ellos conformaron el elenco de voluntarios que se encuadraron en las estructuras militares y civiles del bando republicano. La propaganda desplegada por la Komintern tuvo una influencia decisiva a la hora de movilizarlos, más allá de sus motivaciones particulares. Barcelona se convirtió de manera inmediata en un centro de recepción de voluntarios en los primeros compases de la contienda.

Los voluntarios empezaron por nutrir las milicias populares para, a partir de agosto, dar el paso a la formación de milicias compuestas íntegramente por extranjeros. A finales de verano,



Los voluntarios que se unieron a las filas republicanas provenía en gran medida de la lucha contra el fascismo en sus respectivos países (los fascistas de Oswald Mosley en Inglaterra y sus análogos o similares en Francia) o del exilio impuesto por los distintos regímenes autoritarios de la época (como ocurría en el caso de algunos italianos, los alemanes, austriacos y polacos). También hubo una gran cantidad de judíos, empujados por la motivación de hacer frente al avance del fascismo en Europa. Comunistas, anarquistas, antifascistas de distinto cuño, internacionalistas. Todos ellos conformaron el elenco de voluntarios que se encuadraron en las estructuras militares y civiles del bando republicano

la Internacional Comunista apostó por dar un grado mayor de organización a este flujo de voluntarios y, en septiembre, decidieron formular las Brigadas Internacionales, un modelo organizativo basado en el reclutamiento territorializado por países de personal con experiencia militar, dotándolo de esa manera de eficacia y una dimensión política con mayor proyección. Su composición continuó siendo igual de variada a pesar de que la capacidad de mando recayó sobre agentes de la Komintern.

Estos voluntarios cumplieron funciones de gran calado, no solo militares en el frente, sino también en la retaguardia, y su papel fue imprescindible en la defensa de la República (entendiendo la República como un símbolo en el que se encontraban los más distinguidos horizontes), más allá de episodios particulares de la guerra (que también los hubo). Fueron el sostén del esfuerzo del bando republicano en todas sus expresiones. Una heroica trayectoria que fue truncada por la presión del Comité de No Intervención meses antes del final de la Guerra Civil, aunque en muchos casos fue proseguida por sus integrantes durante la Segunda Guerra Mundial.

En la otra cara de la moneda, encontramos a los voluntarios profascistas, ratas católicas ultranacionalistas irlandesas, ratas fascistas fran-

cesas y portuguesas, ratas monárquicas belgas y ratas blancas, provenientes de la Guerra Civil rusa. Ratas de distinta procedencia, que encarnaban el otro bando de la gran cruzada que atravesaba la época.

CONCLUSIÓN

La abismal diferencia de fuerzas entre ambos bandos inclinó, como todos sabemos, la balanza hacia el lado franquista. A una Guerra Civil plena de masacres, asesinatos y violencia política le siguieron cuarenta años de su prolongación, ahora en forma de régimen. Con la victoria de los franquistas se clausuró lo que acabó revelándose como el inmediato pasado de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que a su vez, fue el inmediato futuro de las tendencias históricas y los contrarios que acabaron confluyendo en el periodo de entreguerras. La Guerra Civil encarnó el presente de la guerra tanto en el sentido más mundano, el que corresponde a los Estados, como en el que enfrenta distintos mundos, el de la revolución y el de la contrarrevolución. Encarnó a su manera la crisis que atravesó este periodo, un periodo de entreguerras, que haríamos mejor en llamarla periodo de guerra. Hasta aquí el relato de los que tomaron parte, por lo menos de una parte de estos. Espero que sirva de algo. ●

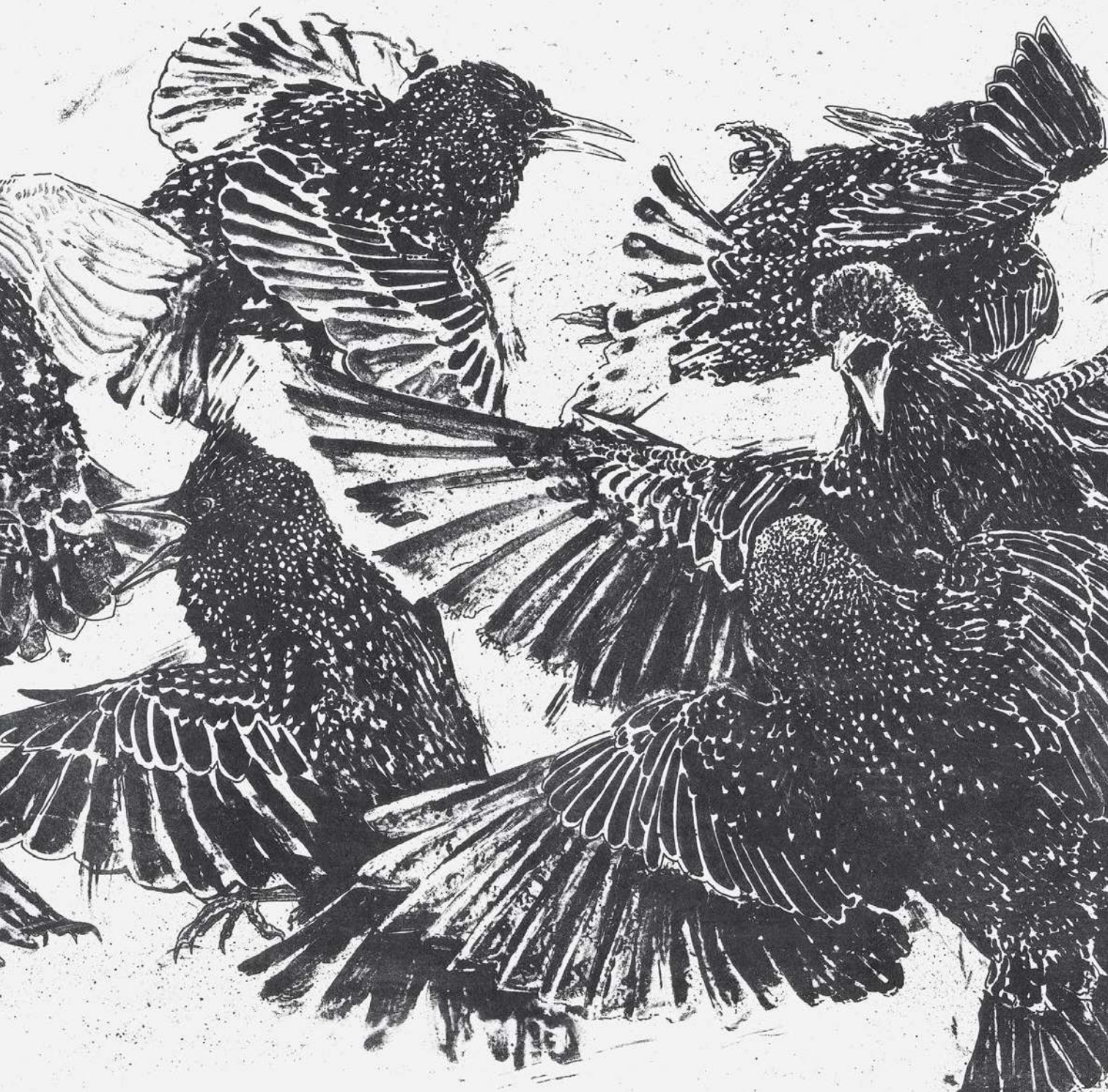






LIMPIEZA POLÍTICA EN NAFARROA

Texto — **Alaitz Iturzaeta**



Lejos de ser una cuestión espontánea, el golpe de Estado de 1936 y la posterior limpieza política que trajo consigo fue consecuencia de la polarización social vivida en la Segunda República española (1931-1936). A pesar de que la coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, ganara elecciones de febrero de 1936, la pugna por consolidar el nuevo Gobierno estuvo muy disputada; así, la izquierda ganó con el 48% de votos, frente al 46,5% de la derecha (CEDA) y al 5,4% del centro. Los partidos de derechas formaron una coalición, pero no fueron capaces de acordar un programa electoral común. Por lo tanto, la CEDA fue la segunda fuerza, detrás de los socialistas. La gran mayoría de votos en Catalunya fueron para ERC (republicanos nacionalistas de izquierda) y, en Euskal Herria, el PNV y los carlistas ganaron las elecciones: los primeros, en la comunidad autónoma, y los segundos, en Nafarroa. Manuel Azaña fue designado presidente del Gobierno, quien puso en vigor el Decreto de Amnistía y comenzó a recuperar la reforma política iniciada por el Gobierno del bienio progresista. El sector de derechas se posicionó en contra del nuevo Gobierno y de sus reformas, e instigó campañas contra la República. Así, a partir de la primavera de 1936, empezaron a organizarse conspiraciones militares contra la República y, en julio, asesinaron a un teniente afín a ella. Los republicanos, por su parte, mataron al parlamentario Calvo Sotelo como represalia. Este suceso, junto con los factores previamente mencionados, llevaron a los militares golpistas a poner en marcha el golpe de Estado que llevaban meses planeando. Así, el 18 de julio de 1936, los militares guiados por el general Emilio Mola perpetraron la guerra más cruel y más dura nunca vivida en el Estado español.

Como se ha mencionado, dicha coalición militar de ideología conservadora, monárquica y fascista quería acabar con la Segunda República española, creando un Estado autoritario y suprimiendo el movimiento obrero organizado. Así, la Guerra Civil y el consiguiente régimen franquista tuvieron como objetivo la purga o exterminio político a nivel estatal. El movimiento obrero estaba organizado y en buena forma; los trabajadores y las trabajadoras se organizaban sobre todo en torno a la CNT (anarquistas) y la UGT (socialistas, vinculados al PSOE) y dichos sindicatos dirigieron varias huelgas, y promovieron y consiguieron reformas laborales, lo que originó miedo entre la

La coalición militar de ideología conservadora, monárquica y fascista que dio el golpe de Estado quería acabar con la Segunda República española, creando un Estado autoritario y suprimiendo el movimiento obrero organizado. Así, la Guerra Civil y el consiguiente régimen franquista tuvieron como objetivo la purga o exterminio político a nivel estatal

derecha conservadora y la patronal. Precisamente dicha polarización política y aquellos conflictos sociales fueron algunos de los principales factores que causaron el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra. El general Francisco Franco fue el líder político-militar del alzamiento, tomando relevo del que en un principio sería cabeza de la sublevación, el general José Sanjurjo, muerto el 20 de julio de 1936. Otros de los protagonistas del alzamiento fueron el general Emilio Mola, conocido como el “director”, principal organizador y cerebro de la conspiración desde Iruñea; el general Gonzalo Queipo de Llano, el cual dirigió el golpe de Estado en Sevilla y la represión en el oeste de Andalucía; y el general Miguel Caballanes, presidente de la primera Junta de Gobierno tras la sublevación en Zaragoza. No se puede dejar sin mencionar que tanto el partido fascista Falange Española como los requetés carlistas dieron su apoyo paramilitar al golpe de Estado, que el adinerado empresario y hombre de finanzas español Juan March costeó gran parte del golpe, inclusive el alquiler del avión Dragon Rapide; y, por último, el apoyo exterior por parte de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, las cuales enviaron tropas y aviones.



En palabras de Rafael Cruz (2007), profesor de Movimientos Sociales e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, la limpieza o el exterminio político consiste en la homogeneización política de la población de un lugar y tiene como objeto la destrucción del enemigo político mediante el uso de la fuerza, la represión y la intimidación. Este fue el objetivo de la Guerra Civil, reprimir y, en última instancia, hacer desaparecer a cualquiera que pudiera ser de izquierdas, socialista, anarquista o comunista. Volviendo a la realidad de Hego Euskal Herria, el franquismo se estableció duramente en el territorio mientras duró la dictadura de Francisco Franco (1936-1975). El Régimen aplicó una fuerte represión contra la identidad, el idioma y el autogobierno vasco, aunque con diferencias según el territorio. Gipuzkoa y Bizkaia fueron declaradas “provincias traidoras” y, en cambio, Nafarroa y Araba se posicionaron a favor del bando sublevado, a pesar de lo cual también sufrieron la represión. A pesar de que Nafarroa no tuvo línea de resistencia, fue castigada con una tremenda violencia y represión; así, según los registros del Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra, más de 3500 personas fueron asesinadas por el franquismo en Nafarroa entre 1936 y 1948. Así, Nafarroa fue el territorio del Estado español que sufrió el exterminio político con mayor crueldad; concretamente, entre el 8,17% y el 9,38% de personas que votaron al Frente Popular en las elecciones de 1936 fueron asesinadas, según diferentes fuentes. La mayoría de personas asesinadas eran de Erribera, por lo menos 859 personas de Erribera occidental fueron asesinadas (el 30,1% de Nafarroa); 363 personas de Erribera media (12,7%) y 456 personas de la Erribera de Tuteria (15,9%). Así pues, el 59% de personas asesinadas eran del sur de Nafarroa. La razón de producirse la mayoría de asesinatos en Erribera fue que la izquierda tuvo más presencia y fuerza en aquel territorio, ya que, en las elecciones de 1936, el Frente Popular obtuvo el 37,8% de los votos allí. Un claro ejemplo de esa sed de sangre es Sartaguda, también conocido como “el pueblo de las viudas”, con una tasa de asesinatos en la Guerra Civil de 67,6 por cada mil habitantes.

Sartaguda era un ducado y casi todo el municipio pertenecía al duque del Infantado. El administrador del duque permitía a las gentes del pueblo labrar la tierra a cambio de una renta, y la tierra se repartía arbitrariamente, es decir, no

El exterminio político consiste en la homogeneización política de la población de un lugar y tiene como objeto la destrucción del enemigo político mediante el uso de la fuerza, la represión y la intimidación

había ningún parámetro de igualdad. En Sartaguda se asesinó al 40% de los hombres que votaron al Frente Popular, es decir, al 41% de varones entre 25 y 29 años y el 49% de hombres entre 30 y 34. En dicho ducado de unos 1200 habitantes, 84 personas fueron asesinadas. A partir del 20 de julio, durante al menos un mes, los vecinos vivieron intervenciones de los nacionales, registros, incautaciones de documentos y bibliotecas, batidas, etc. Muchos hombres fueron interceptados y trasladados a la prisión provincial de Iruñea, otros fueron enviados como voluntarios al frente, etc. Las mujeres de Sartaguda, muchas de las cuales quedaron viudas después, sufrieron torturas y miseria; por ejemplo, a muchas les raparon la cabeza y les hicieron beber aceite de ricino, y, por si fuera poco, como sus maridos estaban detenidos, todo el cuidado y el sustento económico de la familia quedó sobre ellas. Además, a las personas a favor de la República les obligaron a llevar brazaletes, y los pueblos se convirtieron en campos de concentración a cielo abierto. No se puede dejar sin mencionar que de los 78 varones de Sartaguda alistados forzosamente en el Tercio de Requetes Sanjurjo, 46 fueron asesinados en San Gregorio (Zaragoza); es decir, el 59% de los alistados.

El “Tercio de Sanjurjo” fue la unidad militar fundada por Pedro Peñaredonda Samaniego, oficial retirado desde 1931, en los primeros meses de la Guerra Civil en Zaragoza. Estaba formado por republicanos o gente de izquierdas que fueron alistados a la fuerza, principalmente navarros, y se utilizó como proceso para hacer



desaparecer a quienes apoyaban al partido de izquierdas. Es sabido que cuando el Tercio de Sanjurjo se encontraba en el frente de Huesca, luchando contra los republicanos, miembros de al menos una compañía trataron de alzarse contra sus superiores y unirse a los republicanos. Esta conspiración se conoció como “el complot de las alpargatas”, ya que se decía que los alistados llevaban las indicaciones del plan escondidas en sus zapatos. Aun así, uno de los dirigentes de la unidad fue informado por un chivato, y, por lo tanto, la unidad formada por 800 hombres fue llevada a la retaguardia. Al final, se los llevaron al cuartel de San Gregorio y la mayoría fueron fusilados.

Los responsables de la violencia política de la Guerra Civil fueron los militares, así como los responsables del bando franquista, junto con sus aliados, los requetés y los falangistas; estos últi-

mos promovieron y alimentaron dicha violencia. Los militares, bajo la dirección del general Mola, dieron a conocer su bando en Nafarroa el 19 de julio por la mañana, teniendo como objetivo la restauración del principio de autoridad y la eliminación de todo elemento de izquierdas. Buscaban la destrucción de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos de trabajadores y de los cuadros políticos de izquierdas, así como la desaparición de partidos democráticos más moderados y de fuerzas políticas que protegieron y apoyaron a la República. Dos agentes importantes a tener en cuenta en dicha sublevación fueron la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y la Escuadra del Águila. Respecto al primero, se trata del principal órgano político y militar que surgió de la iniciativa del coronel Beorlegui (jefe de Orden Público, nombrado por Mola) la noche del 19 de julio de 1936, y fue utilizado por los carlistas durante la Guerra Civil para facilitar la movilización del Partido Tradicionalista, organizando concentraciones de requetés, repartiendo contingentes en compañías (tercios), y preparando el transporte y los equipos sanitarios. Los líderes más significativos de esta junta eran su presidente, Joaquín Baleztena Azcárate, y el vicepresidente y verdadera fuerza política de la comisión, José Martínez Berasáin, director del Banco de Bilbao en Nafarroa. Respecto al segundo, la Escuadra del Águila era un grupo organizado de unos 18 matones que cometían asesinatos siguiendo las órdenes de la Falange, y repartían terror y represión entre la ciudadanía, realizando detenciones ilegales y fusilamientos sin autorizar. Galo Egüés Cenoz, falangista y pistolero navarro, fue el líder de la Escuadra del Águila, y Gregorio Apesteguía, el criminal conocido como “el lechero de la Rochapea”, fue su fiel ayudante.

Según los registros del Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra, más de 3500 personas fueron asesinadas por el franquismo en Nafarroa entre 1936 y 1948

El “Tercio de Sanjurjo” estaba formado por republicanos o gente de izquierdas que fueron alistados a la fuerza, principalmente navarros, y se utilizó como proceso para hacer desaparecer a quienes apoyaban al partido de izquierdas

Entraban a altas horas de la madrugada en casa de personas de izquierdas y sindicalistas, y así, expandían el terror y la preocupación entre los habitantes desprotegidos. Señalaban a estos últimos como enemigos, robándoles su humanidad. Así, la brutalidad y la represión que llevaron a cabo los sublevados buscaba la fidelidad y la cohesión hacia los vencedores.

CÁRCELES, SACAS Y FUSILAMIENTOS

Cárceles

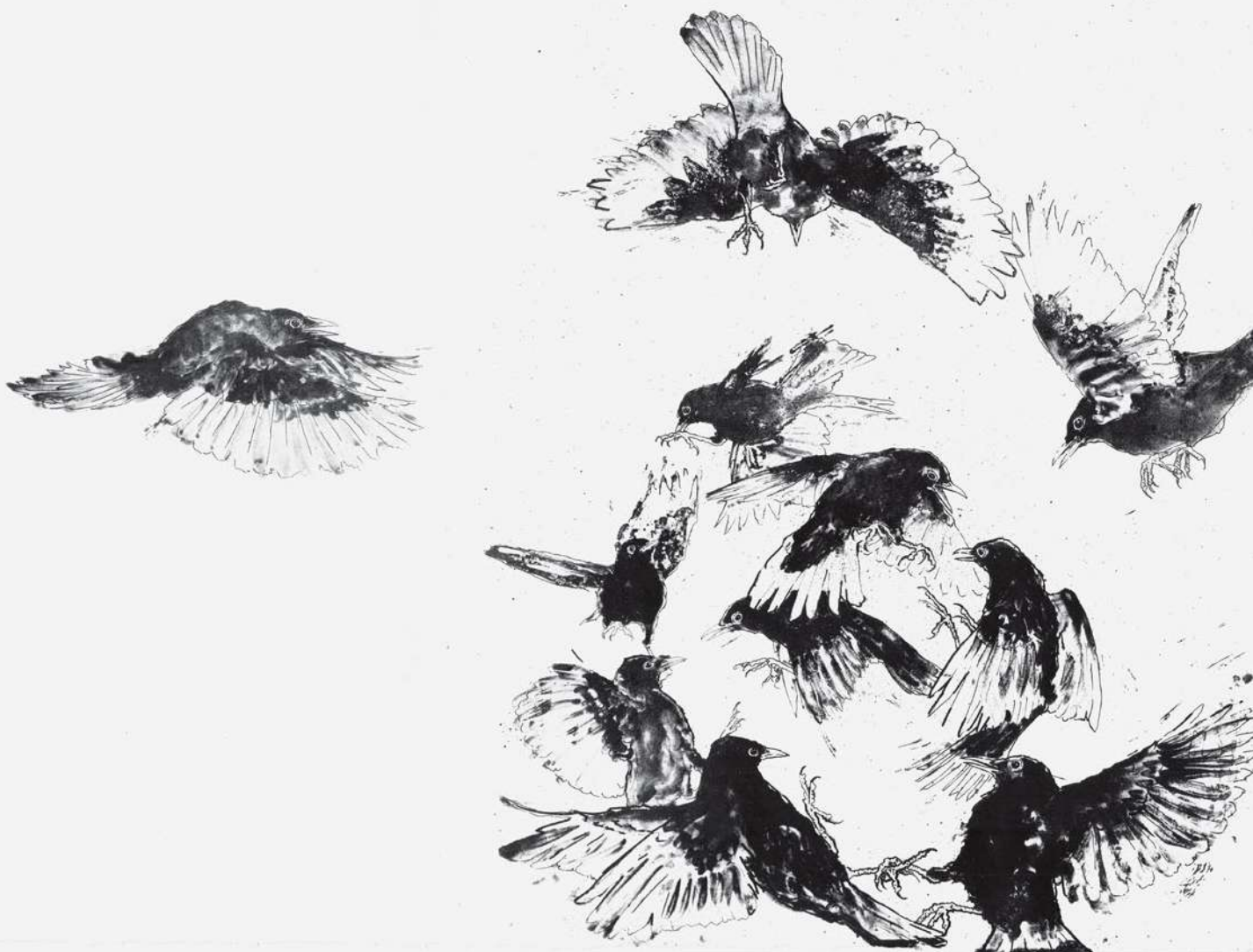
En la época de la Guerra Civil, hubo en Nafarroa varias prisiones que funcionaron, sobre todo, entre el verano y el otoño de 1936, es decir, durante el punto más álgido de la represión y la limpieza política. Las cárceles se convirtieron en espacios de castigo, tortura y deshumanización, y una vez encarcelados, salir de allí con vida y libre se convertía en algo casi imposible. Las cárceles navarras eran las siguientes: la prisión provincial, el fuerte de San Cristóbal, la cárcel de Escolapios, la cárcel de Salesianos de la Falange, las prisiones de los distritos judiciales, las cárceles municipales y la plaza de toros de Iruñea, que se usó en momentos puntuales. Así, los sublevados tenían listas de los elementos a neutralizar, basándose en documentación incautada en los registros a sedes de partidos y sindicatos de izquierda y listas de detenidos en incidentes conflictivos anteriores. Por lo tanto, los impulsores de la Guerra Civil, además de detener o fusilar a cuadros políticos, también neutralizaron a cualquier persona que tuviera una supuesta conexión

o acercamiento con algún partido o ideología de izquierdas, condenándolas a esos centros de detención y/o provocándoles la muerte.

En julio, en los 13 siguientes días al alzamiento, 750 personas fueron encarceladas en la prisión provincial de Iruñea, y en el mes de agosto, 336. En total, en mes y medio, en Nafarroa se privó de libertad por lo menos a 1086 personas. Entre las prisiones, es reseñable el fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba (al lado de Iruñea), ya que en aquella cárcel se fraguó la mayor fuga de presos nunca vista en Europa. Al principio, a pesar de que San Cristóbal se construyó para defender Iruñea, con la aparición de la aviación de guerra el fuerte quedó obsoleto, y, por lo tanto, tras la revolución de 1934, el Estado utilizó el fuerte de San Cristóbal como cárcel hasta la amnistía de 1936. Con el golpe militar de julio de 1936, se volvió a utilizar como prisión, y se llenó de miles de presos provenientes de todo el Estado español. Las condiciones de vida de aquella cárcel eran duras: el hambre, la humedad, las enfermedades y la violencia eran el pan de cada día. El 22 de mayo de 1938, los presos políticos del fuerte de San Cristóbal (la mayoría sindicalistas, y todos republicanos) llevaron a cabo una fuga masiva: 795 presos huyeron de la cárcel, aunque solo tres llegaron a Francia. En aquella huida, fusilaron en torno a 220 presos que huían en los pueblos aledaños y volvieron a encarcelar al resto. Fue una huida organizada por algunos presos políticos desde dentro de la prisión, pero debido a la desnutrición, su mal estado físico, la desorientación y el escaso conocimiento del entorno, entre otros aspectos, la fuga no tuvo éxito. Para acabar, los militares fusilaron a 14 presos acusados de organizar la fuga.

Por otro lado, las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, eran una causa muerte cotidiana para los presos en aquella prisión, y en los primeros años, cerca de doscientos presos muertos fueron enterrados en los cementerios de la cendea de Antsoain. Debido a la saturación de la zona, los dirigentes militares diseñaron un nue-

En el mes y medio después del alzamiento, en Nafarroa se privó de libertad por lo menos a 1086 personas



vo lugar de sepulcro cerca del fuerte, al norte del mote Ezkaba, conocido como “el cementerio de las botellas”. Fue empleado entre los años 1942 y 1945, y enterraron allí a unos 131 presos, la mayoría muertos a causa de la tuberculosis. Los cuerpos de los muertos se enterraban con una botella entre las piernas o a un lado, y dentro de ella se introducía un documento con la filiación. Después del cierre de dicho cementerio, la primera campaña de exhumación fue realizada por Aranzadi Zientzia Elkarte en 2007, y desde entonces se han exhumado docenas de cuerpos, a petición de sus familiares.

Para finalizar con el apartado sobre las cárceles, es remarcable la red solidaria organizada por docenas de mujeres que ayudaron a los presos del fuerte de San Cristóbal e hicieron todo lo posible por hacer más llevadera su estancia en la prisión; fueron mujeres que arriesgaron su vida por ideología, solidaridad y/o porque compartían un vínculo familiar con los presos.

Habilitaron un cementerio al norte del mote Ezkaba, conocido como “el cementerio de las botellas”. Fue empleado entre los años 1942 y 1945, y enterraron allí a unos 131 presos, la mayoría muertos a causa de la tuberculosis

Sacas y fusilamientos

Las sacas eran el nombre que se les daba a los fusilamientos ilegales. Sacaban a los presos de las cárceles, en grupo y clandestinamente, normalmente durante la madrugada, y, sin ningún tipo de permiso legal, les fusilaban y hacían desaparecer los cuerpos en algún lugar apartado. Dichas sacas fueron llevadas a cabo por carlistas, falangistas y agentes de la Guardia Civil, con el conocimiento y la protección de militares golpistas y autoridades civiles. Los falangistas y los requetés se encargaban del trabajo sucio y la Guardia Civil trasladaba a los presos y ayudaba a constituir los piquetes de ejecución. En las ejecuciones estaban presentes también los curas, y su tarea era asistir espiritualmente a aquellas personas que serían fusiladas.

Hay por lo menos 114 sacas o fusilamientos ilegales contabilizados en 1936 en diferentes municipios de la provincia. Observando dónde se hacían dichas sacas, caben destacar tres lugares significativos en Urbasa: la sima de El Raso, la sima de Otsoportillo y el Balcón de Ubaba o Balcón de Pilatos. Respecto a la primera ubicación, en 2013, la Aranzadi Zientzia Elkartea recuperó 10 cuerpos de hombres fusilados, la mayoría de entre 20 y 40 años y un par de más de 50, que fueron asesinados con un tiro en la cabeza y lanzados a las peñas. La segunda ubicación también funcionó como fosa común, y se lanzaron a ella numerosas víctimas de la represión. Por último, el Balcón de Pilatos era un barranco lleno de piedras que no se utilizó solo para fusilamientos, sino que también se arrojaban desde allí los cuerpos de las víctimas para hacerlas desaparecer. Estos lugares se convirtieron en infierno y último recuerdo de muchos ciudadanos. Las alternativas ofrecidas para librarse de ser fusilados eran realizar grandes aportaciones económicas, ser una persona influyente, y/o aceptar los favores sexuales que a veces los sublevados exigían a miembros de la familia. Respecto a eso último, en líder local de los requetés, Valentín Chivite, fue acusado y encarcelado en la cárcel de Tuter a en 1936 por pedir favores sexuales.

MEMORIA HISTÓRICA

Después de la muerte del dictador, los sublevados y sus aliados pronto iniciaron una campaña de silencio y olvido, con el objetivo de acallar a quienes se levantaron contra el golpe de Estado y de olvidar todos los asesinatos que provocó la Guerra Civil. Así, en el libro *Sin Piedad: Limpieza*

Las alternativas ofrecidas para librarse de ser fusilados eran realizar grandes aportaciones económicas, ser una persona influyente, y/o aceptar los favores sexuales que a veces los sublevados exigían a miembros de la familia

política en Navarra, 1936 (2015), Fernando Mikelarena menciona que se crearon dos comunidades diferentes de fallecidos: los del bando ganador, públicamente recordados y ensalzados a través de monumentos, rituales funerarios y mediante homenajes a los caídos; y por otra parte, las personas silenciadas, las víctimas a las que se les robó la humanidad y se les negó el recuerdo. Muchas de las personas fusiladas por los franquistas no fueron inscritas en los registros funerarios, y esto explica el hecho de que haya muchos expedientes de fallecimiento tardío. Sin embargo, a pesar de que las víctimas del franquismo fueron calladas y condenadas al olvido, su familia, sus amistades, sus compañeros y sus vecinos se encargaron y siguen encargándose de que sean recordados. Así, muchas familias han encontrado y recabado información sobre represaliados, exhumado e identificado sus cuerpos, y los han enterrado en sus pueblos, y hoy en día siguen haciéndolo, junto con asociaciones y profesionales que son expertos en ello. José María Jimeno Jurio fue un historiador y etnógrafo navarro, precursor de lo que más tarde se conocería como “memoria histórica”. Estuvo en todas partes recopilando datos e información, realizando entrevistas, escribiendo artículos y estudios, y ayudando de otras muchas maneras, para que fuera posible recuperar la memoria de las víctimas asesinadas por el franquismo, sobre todo en Navarra y en La Rioja. Cabe mencionar también a Fernando Mikelarena, historiador y escritor navarro, que realizó un primer intento de documentar las víctimas navarras y registrarlo todo por escrito. Por otro lado, otras dos asociaciones que han trabajado mucho la memoria a nivel de Navarra son la Asociación de Familiares de Fusi-

lados de Navarra-1936 y la Asociación Pueblo de las Viudas. Así, en la actualidad existen en Nafarroa varios puntos de memoria, como el fuerte de San Cristóbal, Sartaguda, etc.

Gracias a la iniciativa de familias y ciudadanos, Nafarroa fue precursora en la exhumación de fusilados, y, en marzo de 1978, se inauguró en Marcilla (Nafarroa) el primer panteón en su honor. Por primera vez, se trasladaron cuerpos de republicanos asesinados: fueron exhumados de las fosas comunes y llevados a sus pueblos de origen. A pesar de que el posfranquismo no pareciera la mejor época para reclamar la memoria de los vencidos, sus familiares superaron trabas administrativas e incluso amenazas, y empezaron el proceso de enterrar a sus familiares en el cementerio municipal. Otras familias lo intentaron, pero nunca lo consiguieron, porque nadie les proporcionó ningún tipo de información sobre la ubicación de la fosa o los cuerpos habían sido llevados al Valle de los Caídos, o, en otros, simplemente porque habían hecho desaparecer los cuerpos. Fuera como fuese, el 27 de marzo de 1978, se designó una comisión para comenzar la búsqueda de cuerpos en Nafarroa. En este proceso participaron varios curas, alcaldes y concejales, y fue impulsado por algunos miembros del PNV que en aquel momento todavía estaban en

Después de la muerte del dictador, se crearon dos comunidades diferentes de fallecidos: los del bando ganador, públicamente recordados y ensalzados a través de monumentos, rituales funerarios y mediante homenajes a los caídos; y por otra parte, las personas silenciadas, las víctimas a las que se les robó la humanidad y se les negó el recuerdo

Gracias a la iniciativa de familias y ciudadanos, Nafarroa fue precursora en la exhumación de fusilados, y, en marzo de 1978, se inauguró en Marcilla (Nafarroa) el primer panteón en su honor

la clandestinidad. En 1971 varios curas de Nafarroa exigieron a la Iglesia de España que pidiera perdón por su papel en la Guerra Civil, pero la Iglesia se negó y, por lo tanto, muchos curas de Nafarroa denunciaron de diversas maneras la actitud de la Iglesia y pidieron perdón a las familias en sus sermones. Por último, es de destacar que, en este proceso de recuperación de cuerpos, Marcilla y Sartaguda fueron los pueblos más relevantes, como se ha mencionado previamente, el primero porque fue pionero en exhumar a los fusilados por el franquismo y enterrarlos en los cementerios de sus pueblos; y el segundo, porque fue el pueblo más duramente golpeado por el franquismo, con el mayor porcentaje de fusilados. En la actualidad, el Parque de la Memoria se ubica, precisamente, en Sartaguda.

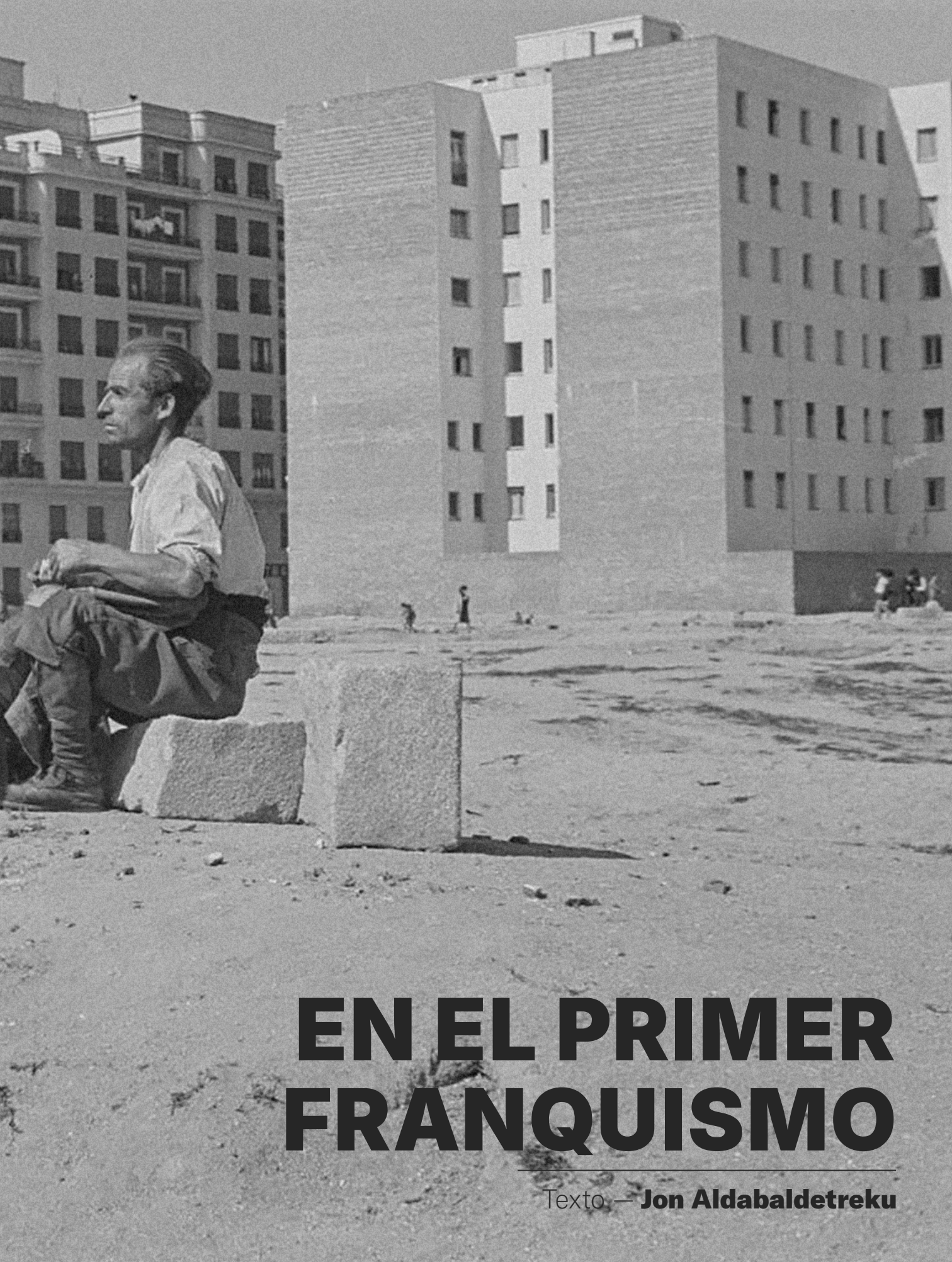
Hoy en día, se han identificado muchas fosas en Nafarroa, e incluso se ha intervenido en algunas de ellas. Las víctimas halladas en dichas fosas, en general, eran hombres de origen humilde, que luchaban por una sociedad más justa y se posicionaban bajo el paraguas de la República. Muchos de ellos estaban afiliados a sindicatos de trabajadores, como, por ejemplo, a la UGT y la CNT, y votaron al Frente Popular. Sus ideales, su visión del mundo y su inquietud por transformar la sociedad les empujó a sus muertes, y los responsables de sus asesinatos los quisieron silenciar y condenar al olvido; pero sus familiares, sus compañeros y sus conciudadanos fueron capaces de hacer frente a las élites políticas y recuperar la memoria lo ocurrido, y siguen en esa tarea. Es decir, lograron traer a la memoria toda aquella limpieza política ejecutada durante la Guerra Civil y la época franquista. Todavía queda mucho por hacer, muchas fosas por exhumar y muchos cuerpos a los que identificar por su nombre. ●







URBANISMO Y LUCHA DE CLASES



EN EL PRIMER FRANQUISMO

Texto — **Jon Aldabaldetrek**

Los inicios de la dictadura franquista trajeron consigo numerosos debates, uno de los cuales giró en torno a la organización del urbanismo y del espacio. Nada más concluir la Guerra Civil, se desarrolló un nuevo discurso urbanístico, vertebrado por conceptos como “arquitectura imperial”, “vivienda social” y “urbanismo orgánico”. El objetivo del primero era evocar “los tiempos gloriosos del Imperio”; la vivienda social, por su parte, en palabras del ministro de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), pretendía representar “un nuevo modo de vida más allá de las meras viviendas”.

En la posguerra, el urbanismo franquista otorgó especial importancia a la ordenación funcional del territorio. Sin embargo, sus principales planteamientos no surgieron de la nada; al contrario, tuvieron su origen en los debates y experiencias urbanísticas internacionales desarrollados antes de la Guerra Civil. Los debates más relevantes de este ámbito se desarrollaron, especialmente, en torno a dos figuras guipuzcoanas principales: Pedro Muguruza y Pedro Bidagor.

Pedro Bidagor (1906-1996) fue uno de los principales referentes del urbanismo español del siglo XX. Arquitecto y urbanista, participó en las principales instituciones de planificación de la posguerra y desempeñó un papel fundamental en el diseño de los proyectos urbanísticos más importantes del primer franquismo. Su enfoque estuvo marcado por las corrientes internacionales de planificación y por la ordenación funcional y jerárquica del territorio. Pedro Muguruza (1893-1952), en cambio, estuvo al frente de la Dirección General de Arquitectura desde el final de la Guerra Civil y se hallaba más próximo a los planteamientos falangistas, concibiendo la ciudad como una comunidad cohesionada y manifestando serias dudas respecto a la zonificación funcional.

Para comprender las primeras políticas urbanísticas del franquismo, es imprescindible re-



Pedro Bidagor

montarse a los momentos previos al final de la Guerra Civil. En febrero de 1938, Pedro Muguruza reunió, por encargo de Franco, a más de doscientos arquitectos en Burgos para debatir las bases de la futura política urbanística del régimen. Tal y como manifestó en el acto de clausura, “los edificios debían de ser sustituidos por hogares”, expresión de la intención de difundir los valores tradicionales del Movimiento Nacional a través del urbanismo.

La reunión de Burgos puso de manifiesto la existencia de las distintas visiones sobre el urbanismo dentro del régimen. El sector falangista, próximo a Muguruza, abogaba por un modelo de barrio que difuminase las divisiones de clase, tomando la familia como elemento fundamental de la organización social. Frente a ello, la visión más técnica, defendida por Bidagor, proponía la zonificación como herramienta básica para organizar el territorio: la separación según el espacio de zonas industriales, residenciales y de ocio. A juicio de los falangistas, sin embargo, esa organización conllevaba el riesgo de concentrar al proletariado en un mismo espacio y, en consecuencia, podía facilitar su organización colectiva.

Estos debates urbanísticos no eran meros asuntos de carácter técnico, ya que en ellos se cruzaban los intereses de las distintas familias políticas del régimen y, en particular, la visión católica vinculaba la vivienda al desarrollo moral y espiritual de la familia. Por ese motivo, las nuevas leyes e instituciones aprobadas a partir de la década de 1940 no tenían como único propósito la ordenación del territorio; también pretendían ser un instrumento para materializar en el espacio los valores políticos, sociales y morales de la dictadura.

En palabras del ministro de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), pretendía representar "un nuevo modo de vida más allá de las meras viviendas"

Las nuevas leyes e instituciones aprobadas a partir de la década de 1940 no tenían como único propósito la ordenación del territorio; también pretendían ser un instrumento para materializar en el espacio los valores políticos, sociales y morales de la dictadura

NUEVOS MARCOS DE COMPRENSIÓN DEL ESPACIO URBANO

Los planteamientos defendidos por Pedro Bidagor se inscribían en las corrientes urbanísticas internacionales desarrolladas desde principios del siglo XX, asumiendo, bajo la influencia de autores como Ebenezer Howard, Tony Garnier o Le Corbusier, una visión funcional y jerárquica de la ciudad, basada en la especialización del espacio y en la ordenación racional del territorio. Estas influencias se manifestaron especialmente en la defensa de la zonificación y en la configuración de sistemas urbanos organizados jerárquicamente; principios que tendrían una gran repercusión en el urbanismo español de la posguerra.

Las nuevas preocupaciones urbanísticas surgieron, en gran medida, para dar respuesta a los retos planteados por el crecimiento de las ciudades industriales. Así, tras la Primera Guerra Mundial, y especialmente a partir de la década de 1920, empezaron a desarrollarse en Europa nuevas corrientes urbanísticas, con la intención de encontrar soluciones a los problemas provocados por el rápido crecimiento de las nuevas ciudades y la industrialización. En ese contexto, varios estados revisaron su legislación urbanística, y el primer franquismo español también bebió de esas corrientes.

Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y, especialmente, la Carta de Atenas de 1933 sistematizaron esta nueva visión

racionalista, mediante la defensa de un urbanismo adaptado a las necesidades de la ciudad industrial, tomando la eficiencia y la funcionalidad como ejes centrales. En consecuencia, se propuso una organización racional de los espacios verdes y las edificaciones, distinguiendo las tres funciones básicas de la ciudad: vivir, trabajar y descansar. La principal novedad técnica de este planteamiento fue la zonificación, entendida como herramienta para organizar el espacio urbano según su uso.

Por tanto, aunque esta nueva concepción del espacio se camufló bajo la necesidad de medidas sanitarias e higiénicas, puede entenderse, en esencia, como un intento de adaptación al nuevo modo de producción capitalista de la época y como una decisión de clase: lo que se pretendía era proporcionar a cada persona trabajadora un espacio seguro y mínimamente confortable para que pudiera desarrollar su trabajo asalariado de la manera más adecuada y eficiente posible.

En ese sentido, la ciudad se organizó conforme a distintas funciones, distinguiendo zonas industriales, áreas residenciales, espacios de descanso, zonas deportivas y áreas de ocio, con el fin de organizar de manera más eficaz la vida cotidiana de la clase trabajadora y el proceso productivo. En España, la primera expresión relevante de esta visión racionalista llegó de la mano del grupo GATEPAC, que defendió la necesidad de renovar la legislación urbanística vigente en consonancia con los planteamientos modernos que se estaban desarrollando en Europa.

Aunque la concepción de un urbanismo adaptado a las necesidades de la ciudad industrial se camufló bajo la necesidad de medidas sanitarias e higiénicas, puede entenderse, en esencia, como un intento de adaptación al nuevo modo de producción capitalista de la época y como una decisión de clase



LOS DEBATES ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES EN EL SENO DE LA DICTADURA

A medida que los debates sobre la organización del espacio iban cobrando fuerza, dentro del franquismo fueron surgiendo también visiones contrapuestas sobre el modelo urbanístico que debía adoptar el régimen. Esos enfrentamientos no eran meras discrepancias de carácter técnico; también constituían una muestra de la pugna ideológica entre las distintas familias políticas del régimen, y tuvieron consecuencias notables en la organización del espacio.

Como ya se ha señalado, estos debates se remontan a antes del final de la Guerra Civil, de modo que la reunión de Burgos de 1938 puso de manifiesto la brecha entre el sector falangista y las visiones más técnicas. El sector falangista organizado en torno a Pedro Muguruza concebía el barrio ideal como un espacio que difuminase las divisiones de clase, tomando la familia como pilar fundamental de la organización social. De este modo, los falangistas apostaban por un espacio interclasista y jerarquizado, con el fin de facilitar el control social y la transmisión de los valores tradicionales.

Por otro lado, la corriente organicista representada por Pedro Bidagor apostaba por la zonificación, imponiendo un espacio funcional y segregado en base a sus objetivos. Lo cual, en opinión de los falangistas, fomentaba la tradición material de la “lucha de clases socialista” y sentaba las condiciones para facilitar la organización del proletariado, al concentrar a todos en un mismo espacio.

No obstante, esos debates no se limitaron a las discrepancias entre dos arquitectos. En la década de 1940, el desarrollo del urbanismo franquista fue el resultado de un proceso complejo de construcción institucional y doctrinal. Como ha señalado Céline Vaz, en el seno del primer franquismo predominó una auténtica “balcanización institucional”: la Dirección General de Arquitectura (DGA), el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), la Obra Sindical del Hogar (OSH), la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) tenían competencias solapadas, lo que generó conflictos continuos y problemas de coordinación.

En ese contexto, la Dirección General de Arquitectura, que se encontraba bajo la dirección de Pedro Muguruza, trató de asumir desde 1939 la dirección de las políticas urbanísticas de posguerra. Sin embargo, la presencia de las distintas

Los falangistas apostaban por un espacio interclasista y jerarquizado, con el fin de facilitar el control social y la transmisión de los valores tradicionales

familias políticas del régimen y el solapamiento de competencias impidieron la consolidación de una dirección única. En consecuencia, las distintas visiones sobre la ordenación del territorio se vieron obligadas a coexistir, tanto en los debates profesionales como en los principales proyectos urbanísticos de la década.

Las discrepancias no se limitaron al ámbito institucional, ya que mientras los sectores más próximos al falangismo defendían comunidades orgánicas y socialmente integradas, otros urbanistas asumieron los planteamientos funcionalistas difundidos internacionalmente. Esos debates se reflejaron en los Congresos Nacionales de Arquitectura y en la *Revista Nacional de Arquitectura*. Muguruza, en particular, rechazó la creación de barrios obreros exclusivos y se pronunció a favor de construir “casas españolas, cristianas y familiares” en su lugar.

Por otra parte, el crecimiento de las grandes ciudades y los flujos migratorios dirigidos hacia los principales núcleos industriales pusieron de manifiesto los límites de las herramientas urbanísticas existentes hasta entonces. En consecuencia, en la década de 1940 se desarrolló una nueva legislación para intervenir en espacios que superaban los límites municipales, reforzando la intervención del Estado y promoviendo la planificación supramunicipal. En ese contexto deben entenderse también las políticas de anexión impulsadas en torno a las principales ciudades.

En definitiva, el franquismo no creó un modelo urbanístico completamente nuevo, sino que asumió los planteamientos principales del movimiento moderno, adaptándolos a los valores políticos y sociales de la dictadura. Pese a las discrepancias internas, la década de 1940 trajo consigo la consolidación de un urbanismo funcional y segregador, que habría de constituir uno de los pilares de la ordenación territorial de las décadas siguientes.







LOS INTENTOS IMPULSADOS POR EL RÉGIMEN EN EL PRIMER FRANQUISMO

Condicionado por la autarquía económica, el régimen tuvo grandes dificultades para ejecutar las leyes y decretos que deseaba, y la proliferación de organismos y direcciones generales generó, más que eficacia, caos y pugnas institucionales.

Hubo algunos intentos ya durante la Guerra Civil: en diciembre de 1936 se promulgó la primera ley sobre vivienda, junto con la creación de la Fiscalía Superior de la Vivienda (FSV), un nuevo organismo encargado de garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias de las viviendas mediante un servicio nacional de inspección. Además, a partir de mayo de 1939, este instituto obligaba a todas las viviendas a disponer de un certificado sanitario.

No obstante, la Guerra Civil generó necesidades específicas en los años de la posguerra. Tomando como base la idea de la “Reconstrucción Nacional” y con el propósito de reconstruir las zonas destruidas por la guerra, así como de ensayar el nuevo modelo arquitectónico que el franquismo deseaba impulsar, en 1938 se crearon los Servicios Técnicos de Falange. Para desarrollar plenamente estos modelos arquitectónicos, el régimen necesitó nuevas instituciones que mejoraran el modelo de vivienda e impulsaran la organización de ciudades y pueblos.

Entre el final de la guerra y la formación del primer gobierno franquista, el régimen tuvo que reflexionar sobre varios aspectos: los criterios de reconstrucción, una política de vivienda eficaz

favorable a la burguesía local, la construcción de nuevas viviendas económicas, el impulso del sistema autárquico y el proceso de colonización interior. La prioridad de los primeros años de política autárquica fue llevar a cabo la reconstrucción en consonancia con los criterios económicos, lo que obligó a dejar de lado el aspecto arquitectónico.

El resultado de todo esto fue el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, que aunque se presentó como un plan integral, nació con una fuerte carga ideológica, con el objetivo de promover el “ambiente tradicional” y la “mejora de la raza”, obedeciendo a la “Misión Nacional”. Entre las prioridades de esa reconstrucción, el régimen estableció una dicotomía entre los ámbitos urbano y rural: los primeros quedaron designados como espacios para la generación de riqueza ideológica, y los segundos como espacios para la generación de riqueza económica. El régimen dejó de lado los proyectos urbanísticos más ambiciosos, limitando drásticamente la construcción de vivienda social. En cambio, apostó por el desarrollo de la actividad en el ámbito agrario, ya fuera a través de la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) o bien construyendo

La dictadura puso en marcha una política intervencionista en la posguerra y asumió el papel de promotora

desde cero nuevos pueblos en pleno medio rural, estos últimos a través del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Sin embargo, contrariamente a los propósitos del régimen –que pretendía, entre otras cosas, evitar la proliferación de grupos proletarios–, los núcleos urbanos experimentaron una fuerte inmigración impulsada por la concentración industrial. Para hacer frente a la situación, el régimen se vio obligado a promulgar en abril de 1939 la Ley de Viviendas Protegidas, con la ayuda y gestión del Instituto Nacional de la Vivienda (INV).

El objetivo de este organismo era apoyar y garantizar la construcción de Viviendas Protegidas y, al mismo tiempo, era la única entidad autorizada para aprobar los proyectos de construcción de vivienda protegida y su normativa. Así pues, la dictadura puso en marcha una política intervencionista en la posguerra y asumió el papel de promotora, ya fuera de forma directa o a través de órganos oficiales intermedios. La nueva legislación sobre Viviendas Protegidas estuvo vigente hasta 1954, cuando se pusieron en marcha las Viviendas de Renta Limitada.

De este modo, el Estado se convirtió en el principal órgano promotor de la construcción de grandes polígonos y solares de viviendas, contemplando así la construcción de viviendas individuales, conjuntos residenciales (polígonos) y, finalmente, ciudades satélite. Durante la guerra también se creó otra institución importante: la Obra Sindical del Hogar (OSH), cuyo objetivo era “crear viviendas dignas y confortables para los productores españoles”.

Cabe destacar la propaganda falangista que manejaba la OSH, empeñada en sostener los valores tradicionales: “Se trata de construir hogares alegres, modernos e higiénicos, en lugar de las casas normales e insuficientes en las que han vivido hasta ahora los trabajadores”.

Los choques entre las distintas familias políticas del régimen también se reflejaron de forma evidente en las nuevas instituciones. Muestra de ello fueron las discrepancias entre José Fonseca y Pedro Bidagor, que se tradujeron en líneas de actuación diferenciadas entre el INV y la OSH, por un lado, y la Dirección General de Arquitectura (DGA), la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), por otro.

No obstante, en muchos casos, todos estos intentos quedaron en meras tentativas. La Guerra Civil no solo agravó la escasez de vivienda en el

Los primeros años de posguerra estuvieron marcados por una dura depresión económica. La construcción de nuevas edificaciones fue inexistente, debido a la mencionada escasez de materiales y al retroceso del capital privado

ámbito urbanístico, sino que también tuvo graves consecuencias en el contexto económico. Por un lado, se produjo una fuerte caída de la demanda, debido a la falta de capacidad adquisitiva de la población. Por otro, también surgieron grandes dificultades en la oferta del sector de la construcción, sobre todo por la escasez de hierro y cemento. Por último, desde el punto de vista financiero, se produjo un intenso proceso inflacionario y una severa inestabilidad monetaria.

En consecuencia, los primeros años de posguerra estuvieron marcados por una dura depresión económica. La construcción de nuevas edificaciones fue inexistente, debido a la mencionada escasez de materiales y al retroceso del capital privado. De este modo, en la década de 1940 el desarrollo urbano fue muy limitado, y es que la situación económica de la población no mejoró hasta la siguiente década y, por tanto, la política en materia de vivienda y urbanismo no se revisó hasta entonces.

El fracaso de la política de Viviendas Protegidas estuvo determinado por varias razones, entre ellas, la desconexión entre la planificación económica nacional y la política sectorial del Estado generó diferencias y falta de coordinación, reduciendo notablemente su eficacia. Años más tarde, el franquismo cambió de táctica en la cuestión de la vivienda y trató de utilizar el sector de la construcción para crear empleo y reducir la tasa de paro.

Para ello, en 1944 se puso en marcha un nuevo modelo de vivienda protegida, orientada a la clase media, denominada Viviendas Bonificables. Con el objetivo de impulsar el propio proceso de construcción, creó un nuevo sistema de ayudas.

En muchos casos, tras la edificación, se autorizó la venta libre de estas viviendas, por lo que los promotores y las empresas constructoras aprovecharon la situación para obtener cuantiosos beneficios.

Por tanto, las Viviendas Bonificables tenían un carácter de clase bien definido, ya que estaban dirigidas principalmente a ese sector de la sociedad que formaba parte de la aristocracia obrera. En cambio, también existía una población no integrada en los núcleos urbanos, compuesta frecuentemente por jóvenes y migrantes del ámbito rural, que vivía a menudo en chabolas construidas por ellos mismos y en condiciones de vida muy precarias. La ley del 17 de julio de 1946 también impuso a las empresas con más de 50 trabajadores la obligación de construir viviendas protegidas, en un intento de satisfacer la demanda de vivienda de la numerosa clase trabajadora concentrada en los núcleos urbanos.

Pese a la proliferación de leyes, instituciones, ministerios y otras estructuras menores, en la práctica todo esto no tuvo un reflejo real. No obstante, aunque la cuestión de la vivienda no fue una prioridad para el régimen en los primeros años de posguerra, hacia 1949 empezaron a aparecer las primeras preocupaciones serias entre los miembros del Gobierno. Por ello, ese mismo año el Gobierno creó una comisión interministerial denominada “el problema de la vivienda y la crisis de la industria de la construcción”, con el propósito de analizar la situación y proponer una solución. En aquel momento había muchas preguntas en el aire: ¿Quién debía construir las viviendas? ¿El Estado? ¿La iniciativa privada? ¿Cómo debía financiarse la construcción?

A juicio de la comisión interministerial, la prioridad era impulsar la construcción desde la iniciativa privada y desarrollar un planteamiento que diera respuesta al déficit de capital existente en el sector de la vivienda. Muchos actores se interesaron por este asunto: miembros de la administración central, empresas del sector de la construcción, promotores con ánimo de lucro, arquitectos y dirigentes de la Iglesia Católica, entre otros. Todos mostraron su acuerdo con la necesidad de liberalizar la política de vivienda y con el mayor protagonismo que debía asumir la iniciativa privada, junto con el abandono de la intervención directa del Estado. Entre los dos modelos de promoción de vivienda vigentes, la iniciativa privada prefirió las bonificables frente a las protegidas.

Hubo un amplio consenso en la cuestión sobre la necesidad de liberalizar la política de vivienda y sobre el mayor protagonismo que debía asumir la iniciativa privada, junto con el asunto del abandono de la intervención directa del Estado

La propia Iglesia fue una de las primeras instituciones en mostrar profunda preocupación ante la escasez de vivienda, pues los eclesiásticos consideraban que la falta de una sólida célula familiar podía propiciar la promiscuidad, el retraso de la edad de matrimonio y, en consecuencia, el descenso de la tasa de natalidad. En otras palabras, a juicio de la Iglesia, la dignidad de la vivienda sería la condición para garantizar la influencia de la religión católica.

Sin embargo, los resultados fueron mediocres, ya que, como explicó con claridad Pedro Muguruza (DGA) en 1946, las viviendas protegidas eran inaccesibles para muchos trabajadores debido a los bajos salarios que percibían. En definitiva, ni los ideales falangistas ni los intereses de la oligarquía conservadora comprendieron el problema en su profundidad. A finales de la década de 1940, los debates racionalistas de la época bélica regresaron al ámbito del urbanismo, y la liberalización iniciada en materia de vivienda tuvo su continuación general con los Planes de Estabilización de 1959, pese a la oposición del sector más conservador del régimen. En última instancia, la escasez de recursos provocada por la autarquía tuvo una repercusión directa en la producción de vivienda y, en consecuencia, en la construcción de vivienda social.

No obstante, tal y como defiende Sambricio, no es correcto pensar que la primera preocupación del Gobierno franquista fuese la construcción de viviendas destruidas. El propio Gobierno, en la exposición internacional *Interbau* de Berlín (1957), tan solo reivindicaba 21.377 edificaciones entre



1939 y 1954, es decir, 1.257 viviendas anuales. Por tanto, las cifras fueron muy escasas, y puede concluirse, por un lado, que más allá de las palabras, apenas se construyó vivienda social durante la posguerra –hasta al menos 1956–, y por otro, que la cuestión de la vivienda tampoco fue fuente de preocupación para el franquismo hasta 1949.

En este período, el nivel de concentración urbana aumentó notablemente y en todo el Estado

9 millones de personas tomaron la firme decisión de trasladarse a las áreas con base industrial: Madrid, Catalunya y Euskal Herria. En el mismo momento en que surgieron las preocupaciones e inquietudes en torno a la cuestión de la vivienda, también se planteó la necesidad de una nueva normativa urbanística, con la intención de sustituir una legislación completamente caduca basada en el siglo XIX.

De este modo, se impuso la aparición de un nuevo concepto para la creación de espacio urbano, cuyo resultado fue la configuración de áreas compuestas de “polígonos”. En cierto modo, era una propuesta similar al modelo urbano que el movimiento moderno había concebido en la Carta de Atenas y que estaba de moda en Europa. Sin embargo, fue precisamente de las tensiones entre esas ideas que se predicaban en Europa y los ideales tradicionales del franquismo de donde surgió el modelo urbano en forma de *collage* que habría de convertirse en una característica definitoria de la ciudad española.

Los polígonos de viviendas tuvieron una enorme importancia en el desarrollo de las ciudades, pues permitieron literalmente añadir nuevas partes urbanas enteras a los núcleos existentes, multiplicando el número de solares disponibles para la construcción y aumentando notablemente el número de viviendas. En lugar de construir barrios que satisficieran diversas necesidades y servicios, se construyeron bloques de pisos en distintas parcelas, sin relación entre sí y muy lejos de garantizar los servicios básicos.

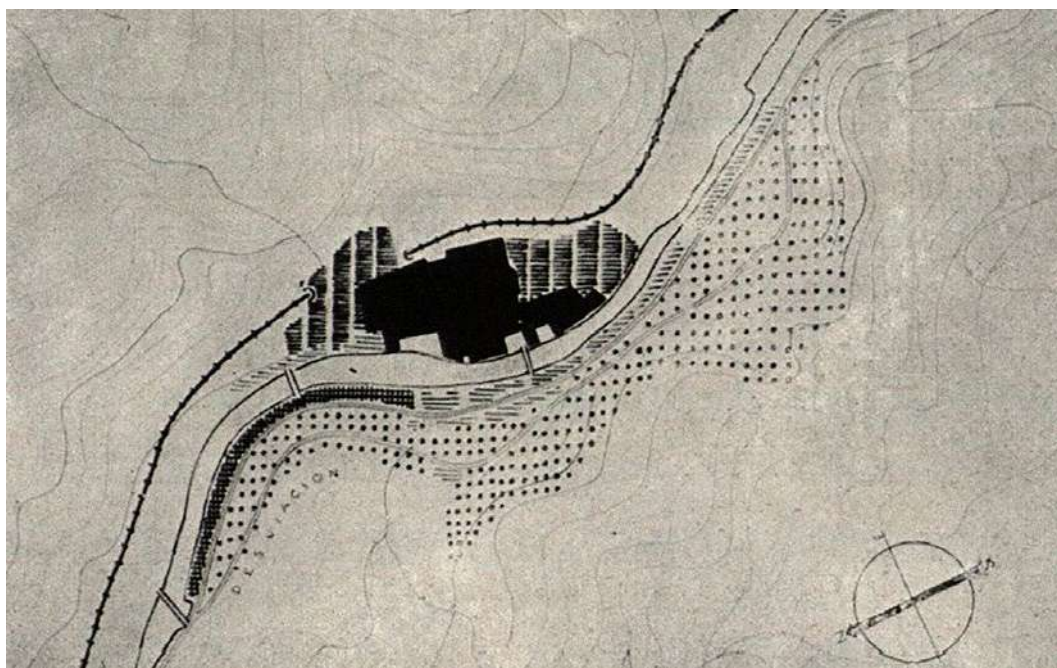
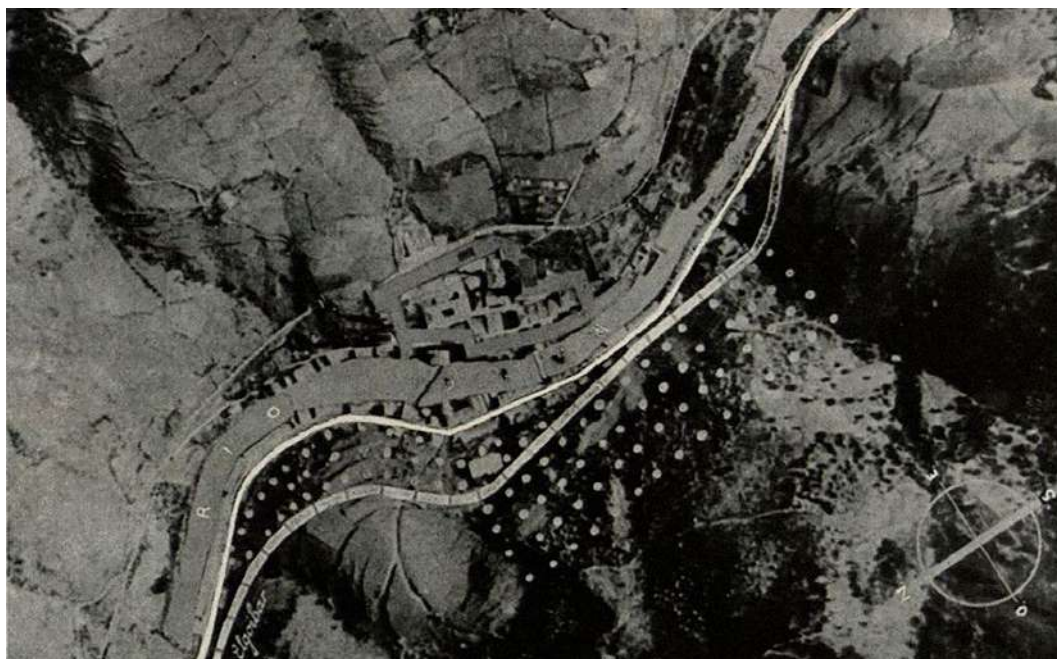
La visión falangista aspiraba a agrupar los barrios bajo una armonía de clases, mientras que los principales impulsores del capitalismo, los liberales, concebían la ciudad misma como la consecuencia “natural” de que la sociedad estuviera dividida en clases sociales. Estos debates fueron muy notorios a principios de la década de 1940, en los Congresos Nacionales de Arquitectura, en otros congresos o, por ejemplo, en la *Revista Nacional de Arquitectura*. Pedro Muguruza, representante del perfil falangista, quería evitar a toda costa los barrios poblados de proletarios, mientras reivindicaba “casas españolas, cristianas y familiares”.

Conscientes de la importancia demográfica y económica que estaban adquiriendo algunos núcleos urbanos, se puso en marcha la legislación urbanística en torno a las grandes ciudades. Estas leyes nacieron para dar respuesta a la gran expansión que se estaba produciendo en los principales núcleos urbanos, muchos de los cuales habían superado sus límites geográficos, lo que puso de manifiesto por primera vez la necesidad de unas normas supramunicipales. La nueva legislación tenía dos ejes principales: justificar el intervencionismo del Estado, dejando de lado la cooperación municipal, e iniciar una nueva política de anexión.

En lugar de construir barrios que satisficieran diversas necesidades y servicios, se construyeron bloques de pisos en distintas parcelas, sin relación entre sí y muy lejos de garantizar los servicios básicos







Plan Urbanístico de Guipúzcoa. El plan para Soraluze

Sin embargo, el auténtico punto de inflexión lo marcaron el Plan Provincial de Guipúzcoa (1943) y el Plan de Madrid (1941-1946), los cuales fueron los primeros intentos reales de aplicar las ideas modernas de planificación. Fue en estos últimos donde se aplicó de manera sistemática por primera vez la idea clasista de la zonificación, algo que más tarde se volvería muy habitual en el urbanismo español. Este modelo era contrario a

las formulaciones falangistas, y Pedro Muguruza criticó abiertamente el plan, pues en su opinión debía alcanzarse el objetivo contrario a la división social.

En el Plan de Madrid de Bidagor de 1946, se aprecia una firme apuesta por la segregación espacial. En su opinión, Madrid necesitaba la creación de al menos ocho barrios satélite y consideraba imprescindible dispersar a la clase

La idea clasista de la zonificación se aplicó por primera vez en Gipuzkoa y Madrid de manera sistemática, algo que más tarde se volvería muy habitual en el urbanismo español

trabajadora en distintas áreas, con el objetivo de debilitarla y controlarla. En el área urbana, Bidaigor señaló que la gente de clase trabajadora solo podía representar el 25% de la población, un máximo de 20.000 personas por barrio satélite.

El sector más liberal del régimen apostó por el sistema de segregación de barrios obreros, y estos primeros planes, con un sistema urbano desarrollado y una distribución según el espacio funcional, fomentaban aquella teoría de la segregación.

Sin embargo, el punto de inflexión más importante de la década de 1950 fue la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Su objetivo fue dar respuesta a dos procesos importantes que se estaban produciendo en aquel momento: los inicios de la Segunda Industrialización y la crisis de la agricultura tradicional. Entre sus propósitos se encontraban ordenar el éxodo rural y garantizar la existencia de suelo suficiente para acoger la nueva migración. A partir de entonces, los núcleos urbanos comenzaron a organizarse mediante Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

En 1957, José Luis Arrese (responsable del Ministerio de Vivienda) autorizó la entrada del sector privado en un ámbito que hasta entonces había sido público, modificando las ordenanzas y permitiendo a las empresas inmobiliarias construir bloques de alta densidad, en detrimento del modelo de vivienda de tres o cuatro pisos que era más habitual en aquel momento. El propio Arrese lo anunció con su célebre frase: “Quiero una España de propietarios, no de proletarios”. Con el propósito de hacer efectivo este objetivo, apostó por un banco dispuesto a conceder préstamos hipotecarios y planteó diversas facilidades.

Tal y como sostiene Zira Box, el organicismo franquista no solo se ocupó de organizar el espacio en sí mismo, sino que albergaba en su interior mensajes ideológicos profundos, ya que

fue un medio para garantizar la dependencia y el control.

CONCLUSIONES

El urbanismo del primer franquismo no puede entenderse ni como mera expresión ideológica de la dictadura ni como simple herramienta para resolver problemas técnicos. Las políticas urbanísticas desarrolladas tras la Guerra Civil combinaron tendencias internacionales, debates urbanísticos preexistentes y los objetivos políticos y sociales que el nuevo régimen deseaba imponer. De este modo, la organización del espacio se convirtió en un instrumento para estructurar la sociedad, condicionando la forma de la ciudad, la estructura del territorio y la vida cotidiana de sus habitantes.

Al mismo tiempo, el urbanismo desempeñó un papel relevante en la configuración de las relaciones de clase. La extensión de la industrialización, la migración del campo a la ciudad y el crecimiento de la clase obrera plantearon nuevos retos, a los que las distintas fracciones de la dictadura intentaron responder mediante una ordenación funcional del espacio. El modo en que se ubicaron fábricas, viviendas e infraestructuras no buscaba únicamente la eficiencia económica; también había detrás una voluntad de construir un determinado orden social. Por ello, más allá de la mera ordenación de las ciudades, el urbanismo franquista permite comprender el pensamiento de clase que sustentó la dictadura y las estrategias mediante las que trató de materializarla a través de la ordenación del espacio. ●

Más allá de la mera ordenación de las ciudades, el urbanismo franquista permite comprender el pensamiento de clase que sustentó la dictadura y las estrategias mediante las que trató de materializarla a través de la ordenación del espacio





Publicación

JULIO 2026

EUSKAL HERRIA

Coordinación,

redacción

y diseño

GEDAR LANGILE

KAZETA

Web

GEDAR.EUS

Redes sociales

TWITTER E

INSTAGRAM

@ARTEKA_GEDAR

Contacto

HARREMANAK@

GEDAR.EUS

Suscripción

GEDAR.EUS/

HARPIDETZA

Edición

ZIRRINTA

KOMUNIKAZIO

ELKARTEA

AZPEITIA

Depósito Legal

D-00398-2021

ISSN

2792-453X

Licencia



Nota de los editores: Las ideas, afirmaciones y conclusiones contenidas en *Arteka* son de los autores que firman cada artículo.

